

CRONICA DEL MES

ENERO-FEBRERO

Ernesto Cruz Alfaro

Tras varias semanas de intensos rumores y crecientes expectativas en torno al "paquete económico" que el gobierno democristiano presentara a algunos sectores del ejército, la empresa privada y los partidos políticos a mediados de diciembre, el presidente Duarte anunció finalmente de modo oficial, el 21 de enero, por cadena nacional de radio y televisión el programa de estabilización y reactivación económica, cuya finalidad sería la de establecer las bases de "un nuevo modelo socio-económico que tenga por objetivo el bienestar de todos los salvadoreños".

Aunque el mandatario no hizo explícitas las presiones ejercidas desde hacía varios meses por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la implementación del programa, las cuatro grandes áreas de política económica en que éste se divide (fiscal, cambiaria, monetaria-crediticia y precios y salarios), evidencian la presencia de los estereotipos de estabilización propios del FMI.

En el área fiscal, las medidas apuntan a la reducción del gasto público y a la optimización de la recaudación tributaria, la cual contempla como instrumentos específicos la ley del impuesto temporal a las ganancias extraordinarias en la exportación de café, decreto ejecutivo de prohibición temporal de importaciones suntuarias, ley del impuesto selectivo al consumo, modificación a la ley del régimen general de extenciones, reformas a la ley de impuestos sobre la renta para ampliar la base de contribuyentes, reformas a la ley del papel sellado y timbres y modificación a la ley del impuesto de importación, para eximir de

impuestos a la importación de autobuses nuevos o usados con capacidad de más de 18 pasajeros.

En el campo cambiario, la medida fundamental la constituye la devaluación del colón a cinco por un dólar, sobre el supuesto de que ello favorecerá el equilibrio de la balanza de pagos vía la reducción de importaciones y aumento de exportaciones. Por lo que respecta a las medidas monetarias y crediticias concomitantes a la devaluación, el programa apunta a reorientar el crédito hacia actividades productivas, incrementar el ahorro del público y contraer el medio circulante mediante el incremento de aproximadamente mil millones de colones en créditos al sector privado, aumento de las tasas de interés sobre los depósitos a plazo sobre 2 y 2.5 por ciento, y de las operaciones activas entre 2 y 4 por ciento, según plazos y tipos de crédito, así como modificaciones al encaje legal y a las tasas de redescuento.

Entre las medidas de precios y salarios, Duarte anunció un aumento adicional de 50 colones a los empleados cuyos salarios fueran menores de 1,500 colones (a los cuales había aumentado 100 colones mensuales a partir del primero de enero), y de 100 colones a los empleados con sueldos entre 1.500 y 3.500 colones, al tiempo que instó a la empresa privada a incrementar entre un 10 y 15 por ciento los salarios de sus empleados. Las medidas contemplan también el incremento de los salarios mínimos en el campo, comercio, industria y servicios, y decretan la fijación de precios de los productos de la canasta básica, aunque por otro lado establecen mayores

precios para los derivados del petróleo y un aumento del 20 por ciento en los pasajes del servicio urbano de buses, y nuevas tarifas para el transporte extra-urbano.

El anuncio público del programa atenuó la incertidumbre por lo que respecta a su contenido, pero no hizo sino catalizar la ola de descontento social generada en las semanas precedentes. Profundizando la línea de críticas desarrolladas a lo largo de éstas, los distintos gremios empresariales no tardaron en reiterar sus escasas simpatías hacia las medidas, a pesar de que el programa colocaba una vez más como actor protagonista de la reactivación al sector privado. La Cámara de Comercio e Industria señaló que la consecuencia del paquete sería "la natural elevación del precio en muchos artículos necesarios para la vida y el trabajo del pueblo salvadoreño;" la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) puntualizó que las medidas eran "esencialmente restrictivas, intervencionistas e impositivas" y generarían "un mayor estancamiento de la economía y un mayor desempleo;" y la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS) subrayó la responsabilidad gubernamental "por los efectos nocivos en el costo de la vida y la inflación, que irremisiblemente producirán las medidas."

Las reacciones del movimiento popular fueron un poco más tardías, debido presumiblemente a menores recursos teóricos de análisis que los de la empresa privada y a la escasa disponibilidad de tiempo material para dedicarse al análisis de las medidas. Pese a ello, los diferentes sectores populares empezaron a pronunciarse masivamente en torno a ellas hacia la última semana de enero. Entre ellos, ANDES 21 de Junio calificó la devaluación como "la peor agresión económica contra nuestro pueblo," ya que el propósito principal del programa económico apunta a "obtener mayores recursos para seguir financiando la guerra;" COACES rechazó las medidas "por considerar que perjudican a las cooperativas y al pueblo en general;" el comité "Mons. Oscar A. Romero" subrayó que el programa "aleja el deseo de paz de los salvadoreños, profundizando la crisis económica, política y social, y en consecuencia también la prolongación de una guerra inútil;" y el MIPTES puntualizó que "el paquete no pasa de ser una receta manualesca del FMI, cuyos nefastos resultados para las mayorías populares son hartamente conocidos."

En este clima de rechazo generalizado por parte de todos los sectores sociales, aunque por

motivos obviamente disímiles entre sí, el presidente Duarte entregó el 23 a la asamblea legislativa los proyectos de ley pertinentes para implementar el programa. En la plenaria de ese mismo día, los 33 diputados democristianos procedieron a aprobar las reformas a la ley de comercialización y regulación de precios, imponiendo el cierre temporal o definitivo de los negocios que alteraran los precios oficiales. La aprobación de las reformas fue precedida de un borrascoso debate en el curso del cual el mayor D'Aubuisson acusó al PDC de estar creando un "Estado policial" y de enfrentar a los sectores productivos con los cuerpos de seguridad, generando más "odio de clases" y cediendo "un espacio político que peligrosamente podrían aprovechar los comunistas." A su vez, el PDC acusó a los areneros de añorar "un pasado cuando los caballos comían mejor que los humanos en algunas propiedades y existían personas que mandaban a poner dientes de oro a su perro en lugar de atender a su servidumbre," y les echó en cara que "cuando ven la situación difícil se ponen calzoneta y anteojos oscuros y se van a Miami." Posteriormente, en la plenaria legislativa del 28, la bancada democristiana aprobó el dictamen favorable de la comisión de hacienda a efecto de que la banca estatizada pudiera establecer agencias en Estados Unidos para la captación de los dólares que los salvadoreños residentes en dicho país enviaban a sus familiares en El Salvador, y aprobó asimismo un impuesto de emergencia del 15 por ciento a las exportaciones de café sobre precios FOB para la cosecha 1985-1986. Tres días después, en la última plenaria del mes, fueron aprobadas también la ley del impuesto selectivo al consumo, las reformas a la ley del papel sellado y timbres y las modificaciones al régimen general de exenciones.

Junto a las discusiones sobre el programa económico, otro eje de intensa confrontación legislativa lo constituyó el proyecto del nuevo código municipal. Pese a que los diputados de oposición objetaron "innumerables fallas técnicas, jurídicas e inconstitucionales," particularmente en lo relativo a las expropiaciones y a la autonomía mayor que el código confiere a las municipalidades en su régimen administrativo y presupuestario, el PDC aprobó el 28 los términos generales del proyecto, luego de que las fracciones de ARENA, PCN y PAISA acusaron a la "aplanadora verde" de haber convertido la asamblea "en una oficina más de la presidencia de la república," y abandonaran el recinto legislativo. En la plenaria del 31, la bancada de-

mocrisiana prosiguió la aprobación de los 159 artículos del código, y acordó que éste entraría en vigencia a partir del 1 de marzo.

Mientras tanto, la guerra, foco fundamental de desequilibrio de la economía, pero a cuyas raíces el programa económico no dedica ninguna solución, profundizó su dinámica de destrucción. Luego de la tregua de fin de año propuesta por la Iglesia y aceptada por el FMLN y el gobierno, pero violada abiertamente por la Fuerza Armada, ésta reforzó sus operaciones en Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión, Cuscatlán y San Vicente, e inició otras en 4 departamentos más. La más importante de ellas, denominada operación Fénix, se inició el 10 de enero en una amplia región que comprende el cerro de Guazapa, Aguilares, El Paisnal, Suchitoto y otras áreas ubicadas al norte de San Salvador, mediante el despliegue de 5 mil efectivos precedidos de fuertes bombardeos de ablandamiento y apoyados por unidades de artillería. Al anunciar el inicio de la operación, el jefe del estado mayor de la Fuerza Armada, general Adolfo O. Blandón, declaró en la hacienda San Cristóbal, al pie de Guazapa, que el operativo constituía el más importante de todos los que habían tenido lugar en el cerro y que en él se implementaría un nuevo "procedimiento táctico" basado "en principios de la dispersión, la rapidez, la información, el golpe de mano y sobre todo la movilidad." Blandón explicó que la Fuerza Armada pensaba examinar "pulgada por pulgada toda la zona del cerro" y sectores circundantes en un radio de 1.500 kilómetros cuadrados y aseguró que el ejército se mantendría allí "por el tiempo que sea necesario," de modo que, una vez desalojado el FMLN, "se instalarán guarniciones permanentes en lugares estratégicos" y se procederá al repoblamiento de la zona y a su reactivación económica mediante la rehabilitación de todas las tierras cultivables. Hacia finales del mes, con el propósito de demostrar el desalojo del FMLN, Blandón ofreció en la cumbre de Guazapa una conferencia de prensa, en la cual informó que la operación había entrado, el 28 de enero, en su tercera fase, y que en su desarrollo avanzaban por los cuatro puntos cardinales, para formar un "anillo," tropas de los batallones élites Atlacatl, Belloso y Bracamonte, así como de otras guarniciones. Explicó que el avance se realizaba, por el este, hacia el área de Tenancingo, Suchitoto y Cinquera; por el norte y oeste, a lo largo de la ribera sur del lago Suchitlán y por el área de

Aguilares-El Paisnal; y por el sur, en los cantones El Salitre y La Cruz, hasta San José de Guayabal.

Blandón aseguró que la tropa avanzaba "con la moral alta," pero el operativo entró en una situación de empantanamiento en la segunda quincena del mes debido a la táctica insurgente de evadir el combate frontal y "hacer el vacío" a la Fuerza Armada. Uno de los jefes militares que comandaban la operación comentó que "los buscamos y no hacemos contacto; no sabemos qué se hacen." Al cabo de una primera semana intensa, durante la cual, según fuentes militares, el ejército habría causado 93 bajas al FMLN, desmantelado importante infraestructura logística e incautado regular cantidad de armas, medicinas y víveres, la segunda quincena del mes habría arrojado menos de 40 bajas guerrilleras como saldo de la operación. En contraste, Radio Venceremos informó 3 semanas después de iniciada la operación que la Fuerza Armada había sufrido 115 bajas, la mayoría de ellas por detonación de minas.

Por otro lado, lo que la Fuerza Armada había presentado públicamente como "limpieza" de guerrilleros, pronto se desenmascaró como amenazante cerco sobre la población civil. Según el máximo responsable directo del operativo, el coronel Leopoldo Hernández, el ejército "rescató" hacia finales de enero a 232 elementos de masas. El acoso a los pobladores civiles de la zona, sin embargo, fue tan atroz que incluso Mons. Rosa Chávez indicó en su homilía del 26 que tenía informes de que unos mil civiles —entre ellos personas heridas, mujeres embarazadas, ancianos y niños— estaban cercados por los batallones Atlacatl y Bracamonte en los cantones Delicia y Platanares; por lo tanto, pidió "a las autoridades la máxima prudencia para evitar daños irreparables a personas inocentes."

Por su parte, el FMLN inició el año con diversas acciones menores de desgaste de la infraestructura económica. Así, el 4 destruyó una subestación eléctrica y una estación de microondas en las afueras de San Martín, y el 7 incendió el beneficio de café San Jerónimo, en Nejapa, a 21 kilómetros de San Salvador. Días antes había destruido las bodegas del mismo beneficio y 1,800 quintales del grano. En lo referente a acciones de hostigamiento propiamente militar, el 4 atacó la base de la Guardia Nacional en Chinameca (San Miguel), a cuyos efectivos causó 3 bajas; el mismo día, otras unidades guerrilleras ata-

caron el puesto de la Policía de Hacienda en El Sauce (La Unión), causando un número indeterminado de bajas en las filas gubernamentales.

Entrada la primera quincena del mes, fueron saboteados también los beneficios El Marquezado, en Santiago de María (Usulután) y Buena Vista, El 98 y El Diamante, en Juayúa (Sonsonate). En esta última localidad, el FMLN llevó a cabo, en la medianoche del 8 de enero, la operación "Viva Juayúa, cuna de la insurrección de 1932; vivan los cinco años de la ofensiva general," en el curso de la cual unidades pertenecientes a la brigada Rafael Arce Zablah (ERP) y al batallón Rafael Aguiñada Carranza (PCS) atacaron la comandancia local de la ciudad, con un saldo de 5 bajas de la defensa civil y la destrucción de los beneficios citados y una agencia del Banco Capitalizador. Al informar sobre la acción, la comandancia general del FMLN manifestó que "esta operación constituye un golpe estratégico al gobierno de Duarte y su economía de guerra," y advirtió que con ella "el FMLN extiende sus acciones y deja abiertos sus frentes de guerra en todo el territorio nacional, consolidando el frente occidental Feliciano Ama." Aunque el general Blandón restó importancia al ataque calificándolo de "propagandístico," el comandante departamental de Sonsonate, coronel Dionisio Hernández, reunió en las primeras horas del día siguiente a los habitantes de la ciudad para decirles, "ustedes creyeron que Sonsonate iba a estar tranquilo, pero nosotros que hemos visto la crueldad de la guerra en Morazán y Chalatenango pedimos a Dios que Sonsonate no vaya a estar como esos departamentos. No sé si ustedes tendrán capacidad para ir a vivir a otro lugar, porque la guerra es cruel y esto es una muestra de que ya llegó a Sonsonate."

En la misma línea de extensión geográfica de la guerra, columnas guerrilleras se enfrentaron el 16 a tropas del destacamento militar número 7 en el cerro La Cumbre, Apaneca (Ahuachapán), mientras que otras unidades rebeldes destruían la alcaldía de El Refugio, la más occidental de las poblaciones en las cuales el FMLN ha accionado en 7 años de guerra. Por primera vez desde enero de 1980, las fuerzas del FMLN combaten simultáneamente en los 14 departamentos.

En los días subsiguientes, unidades del FMLN tendieron una emboscada a tropas de la cuarta brigada en inmediaciones de Tejutla (Chalatenango), con un saldo de 7 soldados muertos, 3 heridos y 7 prisioneros. La Fuerza Armada re-

conoció un muerto y 7 "desaparecidos" en la acción. En otra emboscada que tuvo lugar el 21 en las cercanías de Villa El Triunfo (Usulután), fuentes militares admitieron 10 bajas. El mismo día, el FMLN atacó por varias horas las posiciones del ejército en Osicala (Morazán), causando 4 bajas en las filas castrenses. En la zona paracentral, el 17, columnas guerrilleras ocuparon por media hora la localidad de Apopa (26 mil habitantes), ubicada a 12 kilómetros de San Salvador, y atacaron la comandancia local.

Paralelamente a ello, el FMLN desarrolló una intensa campaña de sabotaje contra el sistema eléctrico, particularmente contra las líneas de transmisión de energía hacia los centros urbanos. En las 3 primeras semanas de enero destruyó alrededor de 170 postes, 45 torres conductoras de energía eléctrica y 10 transformadores, obligando al racionamiento de la energía en 12 departamentos, incluida la capital, donde se empezó a racionar la electricidad en un 20 por ciento. Voceros de CEL explicaron el 19 que los atentados guerrilleros habían provocado apagones en el 85 por ciento del territorio nacional, y que el país estaba siendo abastecido por las plantas de Acajutla, Soyapango y El Jalacatal (San Miguel), las cuales funcionan a base de petróleo. El 24, el presidente de CEL informó que en los 4 años anteriores, este mes de enero había sido el mes en el cual la guerrilla había causado más daños al sistema eléctrico. Otros voceros de la institución informaron que, entre el 2 y el 28 de enero, los daños debidos al sabotaje a la energía ascendieron a 6.23 millones de colones, de los cuales 4.1 millones corresponden a gastos por el combustible consumido en las plantas de emergencia.

El FMLN prosiguió también su campaña de boicot al transporte. Entre el 16 y 21 de enero, tuvo lugar el primer paro del año a nivel nacional. A pesar de la implementación del plan Caminante, diseñado por la Fuerza Armada para contrarrestar el boicot, los insurgentes paralizaron la circulación de vehículos hacia las zonas oriental, norte y paracentral, y mantuvieron anormal el transporte hacia la zona occidental, así como hacia La Libertad y varios municipios del norte de San Salvador. En el oriente, la paralización del transporte originó una aguda escasez de combustible, lo cual, unido a la voladura de postes y torres, obligó al racionamiento de la energía y a la suspensión del suministro de agua potable en San Miguel y San Vicente. Como saldo del paro, 7 civiles resultaron heridos y uno muerto, 15 vehículos fueron destruidos, 11 dañados.

dos y 7 ametrallados. Un segundo paro al transporte a nivel nacional fue decretado el último día de enero.

La prolongación de la guerra, sin embargo, no motivó al gobierno a hacer algún tipo de esfuerzos para el descongelamiento del diálogo. En un documento difundido el 20 de enero, la comandancia general del FMLN y el consejo ejecutivo del FDR informaron haber propuesto al presidente Duarte la realización de una reunión privada en enero, en día y lugar convenido entre ambas partes, a efecto de aprobar definitivamente el normativo acordado en Ayagualo para el funcionamiento de la comisión especial conjunta, elaborar un calendario de reuniones para el primer semestre de 1986 y convenir la temática a tratar en ellas. Como en las ocasiones anteriores, Duarte rechazó la propuesta, "alegando esta vez que en el período inmediato se vería enfrentado a dificultades políticas y ofreciendo explorar posibilidades hasta dentro de ocho meses."

Concomitantemente a la obturación de las perspectivas de reanudar el proceso de diálogo, se recrudeció el impacto de la guerra sobre la población civil de las áreas en conflicto, como pudo comprobarlo personalmente Mons. Rivera en la visita pastoral que efectuó entre el 5 y 10 de enero a las comunidades cristianas de San José Las Flores y Arcatao (Chalatenango). Según le expusieron los pobladores de San Isidro Labrador, San Antonio Los Ranchos y San José Las Flores, luego del llamado de la Iglesia para concertar una tregua de fin de año, la Fuerza Armada emprendió "un fuerte mortereo a los lugares y caseríos de Los Ranchos, Gramales, Cerro La Mesa, Guarjilita y Guarjila" (el primer día de la visita, el propio arzobispo pudo comprobar a la altura de esta última localidad los bombardeos que a pocos kilómetros del lugar estaba efectuando un avión A-37). Las comunidades denunciaron también que "de igual forma mandaron tropas a Concepción Quezaltepeque, Monte Redondo y reforzaron el retén en el desvío El Limón y no dejaron pasar mercancías" navideñas a las poblaciones de Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna, Vainillas, Carrizal, Ojos de Agua y El Zapotal. Asimismo lo pusieron al tanto de los intensos bombardeos sufridos entre octubre y noviembre de 1985 en Patamera, Honduritas, La Laguna, Las Vueltas, Sicahuite, El Jícaro, San Antonio, San Juan y Santa Anita. Por su parte, una delegación de las comunidades cristianas de Jutiapa y Cinquera aprovechó la ocasión para invitar al arzobispo a que los visita-

ra en Cabañas y le entregaron documentos sobre las violaciones sufridas de parte de la Fuerza Armada durante el último bimestre del año. En él denuncian que en el mes siguiente a la liberación de Inés Duarte, las tropas gubernamentales "se ensañaron contra nosotros" y "sufrimos tres desembarcos acompañados de criminales bombardeos y ametrallamientos aéreos y de las tropas del batallón de paracaidistas, quienes después se dedicaron a perseguirnos y a rastrear nuestras viviendas y cultivos" para destruirlos. Igualmente, denunciaron roqueteos y ametrallamientos indiscriminados por aviones A-37 y helicópteros Hughes 500 artillados contra las comunidades de San Nicolás, El Cacao, El Tule, Llanitos, Culebrilla, Azacualpa, San Antonio y San Francisco, e informaron que el propio 25 de diciembre dos aviones A-37 bombardearon Tenango.

Los poderes populares de Chalatenango ofrecieron al arzobispo todas las facilidades para desarrollar la visita. Al darle la bienvenida, el representante del FMLN en San José Las Flores expresó que "monseñor se encuentra espiritualmente entre todo el pueblo salvadoreño que lucha contra la injusticia y la opresión. Nos sentimos contentos y orgullosos de tener la presencia de monseñor Rivera y Damas, el pastor de nuestro pueblo cristiano... Quiero decirle a monseñor que todos los territorios bajo control de Chalatenango heroico se los entregamos desde ya para que él pueda desarrollar todas las actividades como el pastor de todo el pueblo cristiano."

Semejante actitud no pudo menos que contrastar con la agresividad que la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad trataron a la marcha por la paz convocada por el "Comité por el diálogo y la paz en El Salvador" en solidaridad con la marcha por la paz en Centroamérica, que el 28 de diciembre fue detenida en Honduras por efectivos equipados con máscaras antigases, bombas lacrimógenas y fusiles automáticos. La marcha nacional, integrada por unas 600 personas —entre ellas miembros de asociaciones sindicales, gremiales, eclesiales y cooperativistas— partió el 3 de enero hacia la frontera de El Amatillo (La Unión), pero fue detenida por un retén militar antes de llegar a su destino. El comandante de Gotera, coronel Mauricio Ernesto Vargas, señaló a una delegación de los marchistas que el presidente Duarte había visitado la guarnición el día anterior y no le había informado acerca de la marcha. No obstante, les indicó que no se opondría a que continuaran si el comandante de

la tercera brigada, coronel Miguel Antonio Méndez, les autorizaba el paso. Méndez, sin embargo, no accedió siquiera a recibirlos.

Según denunció la Comisión de Derechos Humanos no gubernamentales, al regresar a San Salvador, los marchistas sufrieron "detenciones masivas de la marcha cada diez minutos," el "cateo minucioso" de sus pertenencias personales y el registro de sus nombres, direcciones y número de cédula. Asimismo, los pacifistas denunciaron que a la altura de San Martín "fuimos prácticamente capturados de una manera masiva... haciéndonos un cerco con gran cantidad de tropa de la Guardia Nacional y soldados con carros, tanques, tanquetas y hasta cañones." En dicho lugar fue capturado Brígido Beltrán Sánchez, luego de que uno de los efectivos indicara que procedía "del mismo cantón" que Sánchez y "lo conozco por subversivo." Al hacerse eco de las denuncias, Mons. Rivera expresó en su homilía del 5 de enero que "todo gobierno tiene derecho para decir qué es lo que permite y qué no, pero creo que una vez que se va en la marcha, no hay que hostigarlos. Esas paradas frecuentes no son conforme al respecto a los derechos humanos."

Tras permanecer dos días en la catedral de San Salvador en cuyos sótanos el arzobispo les dio albergue, los marchistas partieron el 8 hacia La Palma (Chalatenango). A la altura de El Tule, sin embargo, les cerró el paso el comandante de la cuarta brigada de infantería, coronel Sigifredo Ochoa, quien, sin permitirles expresar sus motivaciones, les indicó que "no quiero que vengan a perturbar la paz en este departamento; los extranjeros que se vayan a sus países a reclamar la solución de los problemas que allá enfrentan y los nacionales son apátridas, mal nacidos y obedecen a consignas marxistas-leninistas."

El 11, en su intento de desplazarse hacia occidente los marchistas encontraron análogas dificultades de parte de las autoridades militares. Además de interceptarlos en 14 ocasiones, la Fuerza Armada les impidió el ingreso a Ciudad Arce, Santa Ana, Chalchuapa y Las Chinamas, no obstante que el día anterior el presidente Duarte les prometió respuesta inmediata a su solicitud de garantías para proseguir la marcha.

En el plano regional, los acontecimientos de enero giraron en torno a los recambios gubernamentales en Guatemala y Honduras, así como a la reunión de Caraballeda. El 14 se realizó la

asunción presidencial de Vinicio Cerezo y el 27 la de Azcona Hoyos. Aquél reiteró en su discurso de toma de posesión el "irrestringido apoyo" de Guatemala al grupo de Contadora e invitó a los gobiernos del área a crear un parlamento centroamericano para promover soluciones políticas a los conflictos regionales; mientras que Azcona Hoyos subrayó que la política regional de Honduras "se basará en el respeto al principio de no intervención" y se refirió a Contadora como "el medio más asequible para garantizar la paz en la región."

En este clima de respaldo, al menos verbal, el grupo de Contadora retornó a la escena regional antes de lo previsto, pese a la aceptación tácita asumida en noviembre de congelar por 6 meses los contactos regionales, mientras se recomponían los gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica. El 11 y 12 de enero, los cancilleres de los grupos de Contadora (México, Panamá, Colombia y Venezuela) y de apoyo (Uruguay, Argentina, Brasil y Perú) se reunieron en Caraballeda (Venezuela) para revisar los esfuerzos de pacificación hechos hasta ese momento e implementar mecanismos para superar el impasse de la reunión de noviembre. En el "Mensaje de Caraballeda para la paz, la seguridad y la democracia en América Central," suscrito al finalizar el encuentro, los cancilleres recomendaron una vez más la suspensión de las maniobras militares, el retiro progresivo de los asesores militares extranjeros, el compromiso de no agresión entre los países del istmo y el cese del apoyo externo a las guerrillas que operan en la región, y exhortaron a la reanudación de las conversaciones bilaterales de Manzanillo entre Nicaragua y Estados Unidos.

Menos de una semana después, con ocasión de la asunción presidencial de Cerezo Arévalo, los cancilleres de Caraballeda se reunieron con sus colegas de los países centroamericanos. Al final de la reunión suscribieron, el 16 de enero, la "Declaración de Guatemala," en la cual expresaron su adhesión a los principios formulados en Caraballeda y reiteraron la "voluntad de nuestros países de lograr la paz y la estabilidad mediante el acta de Contadora."

No obstante el apoyo brindado a Caraballeda por los propios involucrados en la crisis regional, así como las declaraciones de respaldo de la Comunidad Económica Europea, la OEA y la ONU, las sugerencias en favor de la distensión no encontraron ecos demasiado favorables en el

gobierno de Reagan. El portavoz de la Casa Blanca declaró que Estados Unidos "no tiene planes de reanudar las negociaciones bilaterales con el gobierno sandinista;" el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Elliott Abrams, reiteró que el gobierno norteamericano "mantendrá e incrementará su presión contra el régimen sandinista;" y el secretario de estado, George Shultz, subrayó que, en último caso, el gobierno "actuará sin el consentimiento de los demás países amigos o aliados: podrían objetar nuestra acción, pero eso no sería decisivo."

Al amparo de tan descabelladas justificaciones, Reagan prosiguió las gestiones para ampliar a cien millones de dólares la asistencia a los antisandinistas, y renovó sobre Honduras las presiones para conseguir condiciones más favorables para los campamentos de contrarrevolucionarios dispersados a lo largo de la franja fronteriza con Nicaragua.

En febrero, la dinámica de confrontación entre el PDC y los partidos opositores de derecha abrió un nuevo frente de debates en torno al proyecto de reformas a la ley electoral presentado a la asamblea legislativa por la bancada democristiana. Según explicó el ministro de cultura, Julio Adolfo Rey Prendes, el proyecto apuntaba a otorgar al presidente del Consejo Central de Elecciones (CCE) "atribuciones ejecutivas y administrativas que antes no tenía," pero "las decisiones de tipo político seguirían siendo siempre incumbencia de los tres consejales."

Los partidos de oposición protestaron, sin embargo, que la intencionalidad de las reformas era muy otra. En conferencia de prensa ofrecida por el PCN el 5 de febrero, el secretario general del partido, Hugo Carrillo, denunció que el proyecto pretendía derogar 181 de los 195 artículos de la ley electoral vigente, y 17 de los 41 artículos de la ley transitoria sobre constitución e inscripción de partidos. Carrillo especificó que "de las 25 atribuciones que la ley electoral da al CCE como organismo colegiado, el proyecto de la DC le quita 16 atribuciones y las más importantes, como dirección de todas las actividades administrativas, nombramientos, cancelación de los mismos, traslados, contratación de personal, contratación de equipos, servicios y otras" que anteriormente eran colegiadas y que, de aprobarse las reformas, pasarían a ser atribuciones del presidente del CCE. Junto a ello, las reformas otorga-

rán a éste la facultad de doble voto, mediante la aprobación de un régimen especial, lo cual empantanaría "todas aquellas resoluciones que no sean favorables a los intereses del PDC." Tomando en cuenta —añadió Carrillo— que "ya se acerca la elaboración del registro electoral y el carnet electoral," las reformas constituirán en último término, "el acceso al poder del PDC por medio del control de las elecciones."

Al referirse a la estrategia política mediante la cual adversarán el proyecto, Carrillo aseguró que el PCN luchará primero en la comisión de legislación de la asamblea, y luego presentará ante la corte suprema de justicia un recurso de inconstitucionalidad si las reformas son aprobadas por el PDC. En última instancia, puntualizó, "la fracción de diputados del PCN podría exonerarse y lo mismo haría el presidente de la corte suprema de justicia y el presidente de la corte de cuentas."

Similares críticas provinieron de la fracción de ARENA, cuyos diputados calificaron el proyecto de "maniobra del PDC para tomar el control absoluto del CCE para hacer el registro electoral conforme a sus dictados y voluntad y manipular las próximas elecciones." "El PDC —puntualizó Calderón Sol— tiene el mando en el poder ejecutivo, el mando en el poder legislativo y ahora busca controlar el CCE. No hay duda que este gobierno es autoritario y dictatorial." Al igual que Carrillo, el presidente arenero, Alfredo Cristiani, advirtió que "ARENA luchará firmemente en la asamblea" en contra de las reformas; acudirá en segunda instancia a la corte suprema de justicia "y si no se logra nada, como una alternativa en última instancia, la fracción de ARENA en la asamblea podría exonerarse."

Las preocupaciones mayores del PDC frente a la dinámica del proyecto político, sin embargo, no fueron las derivadas de la feroz oposición de los partidos de derecha al proyecto de reformas a la ley electoral, sino por los avances cualitativos del movimiento laboral y, específicamente, por el surgimiento de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), anunciada el 5 de febrero por dirigentes de la Confederación de Asociaciones Cooperativas (COACES), la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) y la Unidad Popular Democrática (UPD). Estas organizaciones convocaron a la "Asamblea nacional por la supervivencia de los trabajadores," llevada a cabo el 8, en

la cual estuvieron representados cerca de 350 mil trabajadores, pertenecientes a diversas tendencias del espectro laboral, entre ellas el Comité Primero de Mayo (integrado por 75 sindicatos), tradicionalmente considerado como simpatizante del FDR-FMLN, y agrupaciones cuya línea política había venido siendo predominantemente pro-gubernamental, como la propia UPD o el movimiento cooperativista.

Durante la asamblea, las organizaciones laborales emprendieron un análisis conjunto del programa de estabilización y reactivación económica, el cual atribuyeron a "la política de guerra que impulsa el gobierno duartista por la presión de Estados Unidos," al tiempo que subrayaron que las medidas no perseguían objetivamente estabilizar ni reactivar el país, sino "profundizar el conflicto socio-político a costa del hambre y la miseria de la población salvadoreña." En la plataforma reivindicativa elaborada durante el evento, los trabajadores incluyeron las exigencias de bajar los precios del combustible, mantener los intereses de créditos de avío al nivel de 1985 y vender los insumos agrícolas a los precios de la temporada 1984-1985. Al mismo tiempo, exigieron al IRA subsidiar los precios a los cereales de modo que éstos tuvieran una utilidad mínima del 25 por ciento, establecer líneas preferenciales de crédito para los diferentes tipos de cooperativas, e implementar aumentos de salarios de acuerdo a los incrementos reales del costo de la vida. Asimismo, demandaron la reanudación del diálogo con el FDR-FMLN como única alternativa para dar fin a la guerra.

El 21 de febrero, la UNTS convocó a "la marcha por la supervivencia de los trabajadores," la cual contó con la participación de más de 40 mil personas y en la cual estuvieron presentes más de 150 organizaciones gremiales y sindicales, representando a más de un millón de trabajadores.

Aunque el gobierno pretendió deslegitimar la representatividad de la UNTS y rebajar el relieve de la marcha, atribuyendo ambas a las "maniobras desestabilizadoras" del FMLN, no pudo disimular su preocupación ante el nuevo nivel de politización cobrado por la organización laboral. Como contraofensiva al surgimiento de la UNTS, pronto inició una campaña encaminada a mostrar que las medidas del programa económico contaban con el respaldo de amplios sectores laborales. El 11 de febrero, el ministerio de cultura publicó una carta de la Asociación Na-

cional de Empleados Postales de El Salvador (ANEPES), en la cual esta organización expresaba su apoyo al presidente Duarte y exhortaba a las organizaciones gremiales y sindicales a "no sectorizar prestaciones económicas como lo han hecho en huelgas recién pasadas, sino buscar un mejor entendimiento mutuo entre gobierno y trabajador, para un interés general." Un día después, el Movimiento Obrero Campesino (MOC), conformado por 9 organizaciones gremiales y cooperativistas, resaltó en un pronunciamiento sobre el programa económico que "tanto la extrema derecha e izquierda tradicionalmente enemigas, ahora hablan el mismo idioma y sus ataques entorpecen la viabilidad del proceso democrático." Por su parte, la Asociación de Profesionales (APRES) organizó, el 12, una marcha de 500 personas para manifestar su apoyo al gobierno por las medidas económicas y contrarrestar la "campaña desestabilizadora de las extremas." La marcha concluyó su recorrido frente a la casa presidencial, donde fue recibida por el propio Duarte, quien aprovechó el momento para anunciar la rebaja de un colón en el precio del diesel y de 1.50 colones en el precio de la gasolina para los taxistas.

Una semana después, Duarte anunció oficialmente la modificación de algunas de las medidas contenidas en el programa económico, entre ellas rebajas a los precios de la gasolina extra y regular, fuel oil y diesel, y prometió que el ministerio de economía realizaría un estudio sobre la factibilidad de subsidiar parcialmente el combustible a taxistas y empresarios de microbuses. Por otra parte, el referirse a la problemática de los granos básicos, señaló que era necesario aumentar los precios de venta, debido a los mayores costos de producción en que incurrieran los productores y el IRA. En el mismo marco de modificaciones al programa, el 18 la asamblea legislativa aprobó reformas a la ley del impuesto selectivo al consumo, eliminando el impuesto a los productos nacionales que estaban gravados por dicha ley, así como a algunos productos centroamericanos e incluso provenientes de fuera del área que "por su utilidad son importantes para el consumo del pueblo salvadoreño y, por lo tanto, no debe desestimarse su uso."

Pese al clima generalizado de protestas por las medidas económicas y al creciente descontento manifestado por diversos sectores sociales ante la gestión democristiana, la Fuerza Armada permaneció al lado de Duarte, dejando en

ridículo los esfuerzos de la Asociación Cafetalera (ASCAFE) en favor de un golpe de Estado. Un indicio de la coincidencia de intereses entre el alto mando castrense y el poder ejecutivo lo constituyó la orden militar del 1 de febrero, en la cual el coronel Sigifredo Ochoa, hasta ese momento comandante de la cuarta brigada de infantería de El Paraíso (Chalatenango), apareció destinado como agregado militar a Washington.

La orden de traslado no dejó de suscitar ciertas reminiscencias de cuando, en enero de 1983, Ochoa se rebeló contra el entonces ministro de defensa, general José Guillermo García, cuya destitución exigió. En aquel entonces, luego de varios días de negociaciones, Ochoa fue a Washington, mientras que García renunció al ministerio de defensa pocos meses después, para salvar las apariencias. Al comentar aquella ocasión, Ochoa explicó que “cuando eso ocurrió teníamos un gobierno de hecho, y hoy tenemos un gobierno que ha sido electo por el pueblo.” No obstante ello, y a despecho de los desmentidos del general Blandón y el propio Duarte respecto de que Ochoa discrepaba de la gestión gubernamental, la orden de traslado fue precedida de una serie de enfrentamientos más o menos velados con el poder ejecutivo, los cuales se hicieron particularmente manifiestos con ocasión de las negociaciones con el FMLN para la liberación de Inés Duarte, en octubre pasado, y que se fueron exacerbando durante la tregua de fin de año, que Ochoa irrespetó abiertamente, y, más recientemente, con ocasión del anuncio de las medidas económicas. En enero de este año, Ochoa llegó a denunciar la “infiltración comunista” en las filas del gobierno y la Fuerza Armada, al punto que el general Blandón se vio urgido a desmentir públicamente las acusaciones. A finales de enero, diversos rumores insinuaban que el alto mando castrense estaba experimentando cierto malestar por los epítetos jactanciosos con que Ochoa describía su actividad militar en Chalatenango.

Contra lo que algunos sectores supusieron, la orden de traslado no pasó a más, y la Fuerza Armada pronto olvidó el incidente perdida en el fragor de la operación Fénix. El 12 de febrero, el general Blandón informó que ésta había concluido su fase propiamente militar y había entrado en la etapa de reconstrucción de las zonas de las cuales había desalojado al FMLN. Como balance de la operación, indicó que en el curso de sus dos primeras fases la Fuerza Armada

había dismantelado 206 tatús, 18 clínicas clandestinas y 23 campamentos, e incautado 48 fusiles de diverso calibre y una ametralladora M-60. Asimismo, había causado 66 muertos y numerosos heridos al FMLN y “rescatado” a 427 elementos de masas. Blandón reconoció 86 bajas en las filas castrenses: 5 muertos y 81 heridos; mientras que el FMLN aseguró haber causado alrededor de 200 bajas a las fuerzas gubernamentales.

En el frente oriental, la Fuerza Armada concluyó la operación Carlos, la cual entre el 1 y el 13 de febrero involucró a más de 4 mil efectivos en la zona norte del río Torola (Morazán). Aunque el operativo había sido programado como de “duración indefinida,” fue suspendido por un brote de meningitis en la zona, que arrebató la vida a 5 efectivos. El FMLN aseguró que, en los 13 días que duró la operación, causó 48 bajas a la Fuerza Armada, 30 de ellas por efecto de campos minados.

Aparentemente, la operación Fénix no desarticuló significativamente la capacidad ofensiva de la guerrilla en el frente central, y lo que la propaganda triunfalista del COPREFA interpretó como “desalojo” del FMLN del área de Guazapa-Suchitoto-Cinquera pronto se manifestó en una serie de ataques guerrilleros de relativa importancia en las inmediaciones de la zona del operativo. En la última semana de febrero, el FMLN desplegó acciones coordinadas en los 4 frentes de guerra, cuya realización fue presumiblemente potenciada por el repliegue táctico de las fuerzas rebeldes que habían estado acantonadas en Guazapa.

En el marco de la campaña militar denominada “Muerte al paquetazo duartista, viva la lucha de los trabajadores,” unidades guerrilleras atacaron de modo simultáneo, 3 posiciones de la Fuerza Armada en inmediaciones de La Palma (Chalatenango), causando 30 bajas. Dos días después, en la madrugada del 24, unidades pertenecientes a la Brigada Rafael Arce Zablah (ERP) y a la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza (FPL), atacaron con fuego de morteros y fusilería las instalaciones del beneficio de algodón El Martillo, ubicado en la hacienda La Carrera (Usulután). Las pérdidas por la destrucción de las instalaciones y de 40 mil quintales de algodón se estimaron en 3.8 millones de colones. Según informó Radio Venceremos, los insurgentes destruyeron 2 casas-cuartel y causaron 60 bajas a los 250 efectivos que custodiaban el benefi-

cio. Significativamente, 3 días antes de la acción, tropas de 3 guarniciones militares habían iniciado un amplio operativo encaminado a desarticular posiciones rebeldes y a garantizar el desarrollo de las actividades agrícolas y agroindustriales en el área.

En el frente occidental, el 27 el FMLN destruyó las instalaciones del beneficio de café El Refugio, ubicado en el área de San Juan Opico (La Libertad), causando 13 bajas a la guarnición que las custodiaba. Simultáneamente, los insurgentes destruyeron una planta eléctrica, un tanque de agua y la casa-cuartel de la defensa civil. Durante el mismo período, en el frente paracentral, el FMLN atacó a la defensa civil en la ciudad de San Vicente, así como las posiciones de la Fuerza Armada en Zacatecoluca. Fuentes militares señalaron que el ataque a esta última ciudad fue el más fuerte desde enero de 1981.

Al presentar el balance de febrero, el COPREFA informó que el FMLN sufrió 82 muertos y 29 heridos. Asimismo, indicó que la Fuerza Armada había "rescatado" a 462 elementos de masas y 35 insurgentes se habían entregado portando su arma. Según el COPREFA, 17 civiles murieron y 26 resultaron heridos como saldo de acciones del FMLN. El COPREFA especificó que 7 de los civiles muertos y 17 de los heridos lo habían sido por explosión de minas. Por su parte, Radio Venceremos afirmó que la mayoría de las víctimas civiles se debía a minas M-14 y M-18, colocadas por el ejército en zonas densamente pobladas por civiles. Según la emisora, la Fuerza Armada colocó las minas para atribuir al FMLN las víctimas civiles producidas por su explosión. Radio Venceremos explicó que "con estas acciones criminales pretenden que nuestras fuerzas dejen de utilizar las minas revolucionarias, con las que ocasionamos numerosas bajas al enemigo, a la vez que pretenden que el FMLN pierda el apoyo popular." Por otra parte, la emisora informó que, durante el mes de febrero, el FMLN había tendido 13 emboscadas a la Fuerza Armada, y que ésta había sufrido 584 bajas, 251 de ellas por minas en este período.

La crudeza de la guerra motivó a algunos jefes castrenses a explicitar sus reservas frente a la alternativa de resolver el conflicto por una vía exclusivamente militar. Así, el 12 de febrero, el general Blandón expresó que la guerra "ha perjudicado al 99 por ciento de la población salvadoreña, y todos queremos terminar con ella," y sugirió "pensar en cómo darle fin, porque no va-

mos a terminar con ella a pura bala." El 13, el comandante de San Francisco Gotera, coronel Mauricio Ernesto Vargas, declaró que "esta guerra no se va a ganar con cañones, fusiles o bombazos, ni matándonos mutuamente; creo que debemos empezar a entender que solamente el respeto de unos y otros puede empezar a solucionar el problema; ya no podemos seguir matándonos."

No se oyeron apreciaciones análogas del presidente Duarte, que, por el contrario, declaró que "el diálogo ya tuvo su espacio político y ahora ese espacio corresponde al esfuerzo que hacemos en el fenómeno económico, y no puedo meterle más cosas a ese espacio que tenemos." Ante el ex-presidente Carter, sin embargo, con quien se entrevistó el 10, Duarte volvió a aparentar disposición a las conversaciones con el FDR-FMLN, al punto que el visitante quedó convencido de que "el presidente Duarte tiene interés en resolver las diferencias que le impiden continuar el diálogo, y los militares lo apoyan. Mi recomendación es que el diálogo sea reanudado pronto, ya que no creo que las diferencias para continuarlos sean significativas."

Durante su escala en México, Carter se reunió también con los dirigentes del FDR-FMLN, Guillermo Ungo, Rubén Zamora y Salvador Samayoa. Luego de la entrevista, éstos ofrecieron una conferencia de prensa en la cual expusieron un análisis del desgaste político sufrido por Duarte después de año y medio de gestión. Ungo indicó que "el PDC se muestra ahora más débil que antes, incapaz siquiera de tomar medidas reformistas," y resaltó que dicha debilidad se reflejaba en el congelamiento de los esfuerzos de diálogo. A su vez, Zamora subrayó que "si Duarte continúa por el mismo camino de negarse al diálogo su deterioro va a ser todavía mayor al final de este año y puede llegar un momento en que será imposible conversar con él, porque estará en una posición en la que no podrá hacer nada."

Además de recomendar la reanudación del diálogo, Carter declaró que "todavía hay serias violaciones a los derechos humanos en El Salvador, remanentes de los escuadrones de la muerte, encarcelamientos o capturas sin juicio y denuncias de bobardeos indiscriminados, pero creo que es obvio que ha habido progresos."

Si el ex-presidente norteamericano hubiera permanecido 2 días más en El Salvador, probablemente hubiese esgrimido en apoyo de sus

aseveraciones el veredicto condenatorio emitido el 13 de febrero contra los ex-guardias nacionales José Dimas Valle y Santiago Gómez González, a quienes el tribunal de conciencia instalado para conocer el caso del Sheraton encontró culpables de homicidio doloso en las personas de los asesores laborales Michael Peter Hammer y Mark David Pearlman, y del ex-presidente del ISTA, José Rodolfo Viera, asesinado el 3 de enero de 1981.

En los debates que precedieron al fallo intervinieron 2 acusadores particulares y 4 fiscales, entre ellos el propio fiscal general de la república, doctor José Francisco Guerrero, quien, al solicitar dictamen condenatorio para los exguardias, adujo que "uno puede discrepar de la reforma agraria, pero no era matando a Viera y a los asesores como iba a solucionarse la situación." Guerrero añadió que "esta acción de los muchachos ahora sentados en ese banquillo cae en el campo del terrorismo, como tantos hechos execrables que se cometen en el mundo, que demuestran insensibilidad, sangre fría, alevosía, y que dan hacia el exterior una imagen de que aquí vivimos en una jungla."

Para consuelo de Guerrero, por lo menos el departamento de Estado norteamericano no era de la opinión de que El Salvador fuese una jungla. En la parte correspondiente a El Salvador, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 1985, el departamento de Estado señala una "mejoría general," si bien admite que "continúa la pérdida de vidas civiles como resultado de acciones militares de las fuerzas gubernamentales y hay reportes fidedignos sobre prisioneros sometidos a abuso por parte de oficiales." No obstante, por otro lado, aseguró que la política del presidente Duarte era "claramente opuesta" a dichos abusos y había conducido a que "el número de tales denuncias sea menor, las muertes de civiles durante operativos militares han decrecido y no hay ya denuncias de masacres por parte de la Fuerza Armada," la cual "se ha esforzado por conducir sus operativos de una manera más humana." En relación a los asesinatos políticos, el informe indica que el número de ellos ha continuado declinando hasta un promedio de 29 mensuales a lo largo de 1985, mientras que, según estimados, la guerrilla sería responsable del 55 por ciento de las muertes civiles.

En contraste con el informe del departamento de Estado, el Socorro Jurídico Cristiano "Monseñor Oscar A. Romero" difundió en

Madrid el 15 de febrero un informe en el cual detalla que 1.655 civiles murieron en El Salvador durante 1985 víctimas de "ejecuciones arbitrarias" perpetradas por el ejército, cuerpos de seguridad y grupos paramilitares. La cifra, referida únicamente a los casos registrados por el Socorro Jurídico y de los cuales ésta poseía pruebas documentadas, no incluye las numerosas víctimas de los bombardeos indiscriminados efectuados por la fuerza aérea sobre la población civil.

Por otra parte, el Socorro Jurídico denunció que, al amparo del estado de sitio y del decreto 50, un promedio de 25 a 30 personas fueron capturadas diariamente en 1985. De éstas un promedio de 3 fueron dadas por desaparecidas semanalmente y 3 fueron diariamente remitidas a los penales de Mariona e Ilopango, procesadas a la orden de juzgados militares con cargos contra el Estado, fundados en declaraciones extrajudiciales obtenidas "bajo la presión de torturas psicológicas y físicas." Desde 1980 hasta diciembre de 1985, un total de 2.190 personas fueron enviadas a los mencionados penales (77 de ellas ingresaron en 1985), mientras que en los mismos 6 años solamente 182 fueron liberadas. Las capturas fueron acompañadas normalmente de amenazas y torturas. Entre enero y septiembre de 1985, el Socorro Jurídico registró un total de 697 casos de aplicación de torturas diversas a los presos políticos, entre ellas la capucha, choques eléctricos, golpes en diversas partes del cuerpo, introducción de objetos punzantes, suministro de drogas, etc.

En el plano regional, la primera semana de febrero cerró el proceso de recambios gubernamentales en Guatemala, Honduras y Costa Rica. El 2, el candidato del partido de Liberación Nacional (PLN), Oscar Arias Sánchez, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica con el 52.3 por ciento de los votos, seguido de Rafael Calderón Fournier, del partido Unión Social Cristiano, quien obtuvo el 45.7 por ciento.

Contrariamente a lo que algunos observadores políticos esperaban, las primeras declaraciones de Arias Sánchez en torno al conflicto regional no fueron del agrado del gobierno norteamericano. El 20, Arias Sánchez opinó que no creía que "con la ayuda a los contras el presidente Reagan vaya a lograr lo que quiere... si yo fuera él, daría ese dinero en ayuda económica para los países del área y no en ayuda militar a los antisandinistas." Luego de las declaraciones, el embajador norteamericano en San José fue lla-

mado por el departamento de Estado y, según informes diplomáticos, debido a sus comentarios, la Casa Blanca giró instrucciones para retener un préstamo que se concedería próximamente a Costa Rica para la construcción de obras públicas.

Mientras tanto, los acontecimientos regionales aportaron evidencias adicionales de la discrepancia de perspectivas entre Estados Unidos y Latinoamérica en torno al conflicto centroamericano. En Washington, el 10 de febrero, los cancilleres de los grupos de Contadora y de Apoyo entregaron a G. Shultz la declaración de Caraballeda y le solicitaron reanudar "el diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua y que cese el apoyo a los contrarrevolucionarios."

Lejos de hacerse eco de la solicitud, el propio Reagan manifestó el mismo día que Estados Unidos haría "todo lo posible para conseguir ayuda militar para los rebeldes de Nicaragua." En alusión a las declaraciones de Reagan, el canciller colombiano, Augusto Ramírez Ocampo, comentó al día siguiente que tales propósitos "atentan contra la paz y el orden jurídico internacional y van contra la intención del mensaje de Caraballeda" y lamentó que Estados Unidos "se arroge el derecho de ser policía de los otros países cuando el orden jurídico puede conseguir ese objetivo." En apoyo a Ramírez Ocampo, el canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda, subrayó que "la solución al problema de Centroamérica es política y negociada" y recordó al gobierno norteamericano que los 8 cancilleres "representan a unos 350 millones de latinoamericanos que hacen acto de presencia con una interpretación sobre lo que es el fenómeno centroamericano y una proposición de soluciones al problema" que no podía desdeñarse a la ligera.

Los argumentos latinoamericanos tampoco pudieron esta vez hacer entrar en razón a Reagan. Al redoblar las gestiones para incrementar a 100 millones de dólares la asistencia a los contras, el ex-actor de cine declaró el 19 que "es vital para la seguridad de Estados Unidos proporcionar a los combatientes por la libertad no sólo los medios para luchar por ella, sino para ganar", ya que "no se pueden combatir helicópteros pilotados por cubanos con curitas y matamoscas." Como corifeos de la campaña, el secretario de defensa, Caspar Weinberger, señaló el mismo día que "Estados Unidos no tolerará

una segunda Cuba casi en nuestro propio patio," mientras que George Shultz arguyó que "Nicaragua es el peligro más inmediato para la estabilidad y democracia del continente... por eso Estados Unidos no debe abandonar a la resistencia democrática que existe en ese país." Más explícitamente, durante la visita a Grenada, Reagan advirtió el 20 que "Estados Unidos debe ayudar a los que luchan por la libertad en Nicaragua al igual que ayudó a los grenadinos..."

La campaña contra Nicaragua empezó a alcanzar niveles tales de retórica que incluso los propios congresistas empezaron a percatarse de que el paroxismo de Reagan no se debía tanto a la preocupación por la seguridad de Estados Unidos, sino al temor de que su imagen de contensor del comunismo se viera vulnerada. El 20, la cámara de representantes aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a Contadora, mientras que miembros del comité de inteligencia del senado denunciaron que la decisión de la Casa Blanca de publicar un documento de desinformación presuntamente preparado por el gobierno nicaragüense (en el cual éste indicaba las gestiones a realizar ante ciertos congresistas para mejorar la imagen de Nicaragua) resultaba "escandalosa e intensa catalogar como comparsas del comunismo a los senadores y congresistas que voten contra la ayuda militar a los contrarrevolucionarios." A su vez, la contraloría general de Estados Unidos denunció el 21 que "el Pentágono ha usado las maniobras militares en Honduras para apoyar la presencia permanente norteamericana en ese país," y acusó al departamento de defensa de haber ocupado "fondos que en algunas partidas sobrepasan los 200 mil dólares y que no han sido aprobados por el Congreso." Una fuente añadió que "el Pentágono manipuló las cifras para legitimar su acción, de forma asombrosa."

En Latinoamérica, la gestión de Contadora siguió cosechando más adhesiones. El 26, el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti inauguró en Punta del Este una nueva reunión de los grupos de Contadora y de Apoyo, la cual concluyó con la firma de un documento en el cual, una vez más, se llama al "cese del apoyo externo a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales que operan en la región" y se subraya la necesidad de "continuar y finalizar" la firma del acta de Contadora, al tiempo que se acuerda la creación de una comisión civil de "preservación de la paz" que se encargaría de vigilar la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El

12, estos dos países normalizaron sus relaciones diplomáticas, congeladas desde el incidente de Las Crucitas, ocurrido el 31 de junio de 1985.

En medio de numerosos gestos de aliento para la distensión regional, provenientes de toda

Latinoamérica, la última semana de febrero sorprendió a Reagan bregando incansablemente para financiar con más holgura los crímenes de los contras.

